

Expediente N° 387- 66- 13

LAUDO ARBITRAL

DEMANDANTE: CONSORCIO CEDAQUI S.A.C. y ESTEFHANIE PROVEEDORES DE CÉSAR ADAUTO QUISPE (en adelante el CONSORCIO, el contratista o el demandante)

DEMANDADO: Oficina Regional Sur Oriente Cusco - Instituto Nacional Penitenciario – INPE (en adelante el INPE, la Entidad o el demandado)

TIPO DE ARBITRAJE: Institucional y de Derecho

ÁRBITRO ÚNICO UNIPERSONAL: Rafael Aysanoa Pasco

SECRETARIA ARBITRAL: Silvia Rodríguez Vásquez

Resolución N° 10

En Lima, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil catorce, el Árbitro Único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, escuchados los argumentos sometidos a su consideración y analizado las pretensiones planteadas en la demanda y contestación de la demanda, dicta el siguiente laudo para poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada:

I. Existencia del Convenio Arbitral, Designación e Instalación de Árbitro Único

1.1 El Convenio Arbitral:

Está contenido en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato N° 005-2013-INPE/22 derivado del Concurso Público N° 001-2012-INPE/22, para la contratación del "Servicio de Alimentación para personas del Establecimiento Penitenciario Cusco Varones y Cusco Mujeres de la OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO INPE Cusco", de

fecha 14/03/2013 (en adelante, el CONTRATO), en el cual las partes acordaron que cualquiera de ellas tenía el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad prevista en los artículos 144°, 170°, 175° y 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.2 Instalación de Árbitro Único:

Con fecha 08/01/2014, se realizó la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal, constituido por el doctor Rafael Aysanoa Pasco; con la asistencia de ambas partes, en donde se fijaron las reglas aplicables al presente proceso.

II. Normatividad aplicable al Proceso Arbitral:

Conforme a lo establecido en el Acta de Instalación, son de aplicación al presente proceso arbitral, el Reglamento de Arbitraje del CENTRO, el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y, en forma supletoria, el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

Asimismo, se estableció que, en caso de discrepancias de interpretación o de insuficiencia de reglas, el Árbitro Único resolvería en forma definitiva, del modo que considere apropiado.

III. De la Demanda Arbitral presentada por el CONSORCIO:

3.1 Mediante escrito de fecha 22/01/14, el CONSORCIO presentó su demanda arbitral contra el INPE.

3.2 A través de las pretensiones contenidas en su demanda, el CONSORCIO solicita lo siguiente:

1. Que se deje sin efecto la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, ambas diligenciadas notarialmente el 13 de setiembre de 2013, debido a la irregular y unilateral resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, al no haberse seguido el debido proceso previsto en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Que se ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE la continuidad de la ejecución de las obligaciones del Contrato N° 005-2013-INPE/22, debido a la irregular y arbitraria resolución del referido contrato.
3. Que se ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE la devolución de la garantía de fiel cumplimiento constituida por la Carta Fianza N° 010392243, que asciende a un monto total de S/. 270,063.50 (Doscientos setenta mil sesenta y tres con 50/100 Nuevos Soles), debido a la irregular y arbitraria resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22 por parte de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del Instituto Nacional Penitenciario.

RAD

4. Que se ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE el pago total de los gastos arbitrales del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por un monto que asciende a S/. 15,000.00 (Quince mil con 00/100 Nuevos Soles), los mismos que se habrían generado por causas imputables a la Entidad.
 5. Que se ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE el pago de S/. 35,000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 nuevos soles) por los costos administrativos que genere a nuestra representada el presente proceso arbitral.
- 3.3 Como **fundamentos de hecho**, el CONSORCIO manifiesta que el 28 de febrero de 2013, como consecuencia de la Resolución N° 415-2013-TC-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado le otorgó la buena pro, en razón del recurso de apelación interpuesto en contra del otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 018-2012-INPE/22 derivada del Concurso Público N° 001-2012-INPE/22, desprendiéndose lo indicado en el cuadro consignado en la página 2 del escrito de demanda arbitral.
 - 3.4 Manifiesta a su vez, que el 14 de marzo de 2013, el CONSORCIO suscribió con la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del Instituto Nacional Penitenciario, el Contrato N° 005-2013-INPE/22 referido a la “Contratación del servicio de alimentación para personas en el Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones y Cusco Mujeres de la Oficina Regional Sur Oriente -INPE”.
 - 3.5 El CONSORCIO manifiesta que el 13 de setiembre de 2013, mediante Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, la Oficina Regional Sur Oriente Cusco le comunicó la irregular y unilateral resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, por una supuesta causal atribuible al CONSORCIO, sin atender al procedimiento regulado en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
 - 3.6 Al respecto, alega que el literal c) del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que en caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última podrá resolver el contrato, en forma total y parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.
 - 3.7 Aunado a ello, el CONSORCIO precisa que el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contempla como causales de resolución por incumplimiento, los casos en los cuales el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, o haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, y/o paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación.
 - 3.8 Asimismo, el demandante señala que el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que si alguna de las partes falta al

cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. Del mismo modo, el citado artículo establece expresamente que no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, casos en los cuales bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

- 3.9 El demandante indica que, hechas las precisiones correspondientes, mediante Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, diligenciada por conducto notarial el 13 de setiembre de 2013, la Oficina Regional Sur Oriente – Cusco le comunicó la resolución total del Contrato N° 005-2013-INPE/22, debido a las causales expuestas en la supuesta Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22-04 recibida por el CONSORCIO el 11 de junio de 2013, en la que supuestamente se le requería el cumplimiento de obligaciones contraídas con la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE.
- 3.10 Sin embargo, el CONSORCIO precisa que las causales contenidas en la Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22-04, difieren radicalmente de los motivos expuestos en la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, exponiéndose en estos dos últimos instrumentos que generaron la resolución del contrato, motivación que difiere o es muy distinta a lo requerido en la Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22-04.
- 3.11 Al respecto, el demandante precisa que subsanó oportunamente las supuestas deficiencias contenidas en la Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22-04, razón por la cual, la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE, otorgó la CONFORMIDAD del servicio, cumpliendo la Entidad con el pago integral de la prestación ejecutada.
- 3.12 El CONSORCIO precisa también que conforme a la Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22-04, se le otorgó un (01) día calendario para subsanar las supuestas deficiencias, lo cual resultaba un imposible, pues existían algunos trámites de documentos que requerían de plazos mayores a lo solicitado o estaban sujetos a la disponibilidad de la misma autoridad penitenciaria.
- 3.13 Asimismo, el CONSORCIO señala que la Cláusula Décimo Tercera del Contrato N° 005-2013-INPE/22, precisa que cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, y los artículos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.14 Ahora bien, el demandante señala que el contrato constituye la fuente de obligaciones de las partes contratantes, la cual está constituida en el mandato

legal, reglamentario, las bases integradas y la oferta ganadora, por lo que debe ser atendido tanto por el Contratista como por la Entidad, debido a que su formalización constituye una declaración de voluntad y al estar debidamente perfeccionado, tiene fuerza de Ley y por ello, al establecerse causales de resolución administrativa que opera por ministerio de la Ley, quien tiene la obligación de su ejecución e incumple su contenido, se somete a las penalizaciones que conlleva su inexecución.

- 3.15 Asimismo, el CONSORCIO manifiesta que existe una presunción legal, artículo 1329° del Código Civil, que indica que el incumplimiento de obligaciones o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, es atribuible a la parte que debió ejecutarlas, salvo que ésta demuestre que el incumplimiento se produjo a pesar de haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, o que la causa de ella fue un caso fortuito o fuerza mayor.
- 3.16 Sin embargo, el demandante resalta que la resolución irregular y unilateral del Contrato N° 005-2013-INPE/22, por parte de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE, la cual se encuentra fundamentada en el contenido de la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, no tiene como fundamento el incumplimiento esencial de sus obligaciones contractuales, pues, el objeto y la finalidad de la relación contractual era la "Contratación del servicio de alimentación para personas en el Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones y Cusco Mujeres de la Oficina Regional Sur Oriente -INPE", y agrega que en ningún momento fue incumplido o interrumpido total o parcialmente por su parte.
- 3.17 En efecto, el CONSORCIO alega que la resolución unilateral del Contrato N° 005-2013-INPE/22, por parte de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE se basó sobre hechos exógenos y aislados al contrato, lo cual no afectó el servicio de alimentación, es decir, los alimentos fueron preparados y entregados oportunamente a la población penal y al personal del INPE, bajo los lineamientos de la relación contractual, pues no existió un incumplimiento de las obligaciones de preparado y entrega de los alimentos a los comensales o el dejar de entregar el desayuno o almuerzo o cena, pues de haberlo hecho sí hubieran recaído en una situación de incumplimiento que no podía ser revertida, donde a la Entidad le hubiese bastado comunicar al CONSORCIO mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, sin que anteceda una carta de apercibimiento.
- 3.18 Sin embargo, el demandante agrega que pese a que el motivo de la resolución contractual contenida en la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22, de fecha 15 de julio de 2013, no se enmarcó en una de las causales de incumplimiento previsto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del INPE resolvió de manera irregular y unilateral el contrato. Máxime, si la motivación expuesta en la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, difiere radicalmente de la Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22-04.

- 3.19 El CONSORCIO añade que la normativa en materia de contratación estatal no regula la posibilidad de que las partes establezcan supuestos y procedimientos de resolución de contrato distintos a las causales previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, pues las únicas causales de resolución de contrato se encuentran previstas en el Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el literal c) del Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.20 Al respecto, al CONSORCIO le resulta necesario llamar a colación lo expresado en el último párrafo del numeral 3.4 de la Opinión N° 028-2010/DTN, en la cual precisa que los participantes del proceso de selección tienen conocimiento de las condiciones de resolución de contrato, ya que se encuentran incluidas en la proforma de contrato que forma parte de las Bases, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26° de la Ley. En efecto, alega que en el proyecto de contrato debería incluirse las cláusulas obligatorias, entre ellas la de resolución de contrato, así como las disposiciones a las cuales estarían obligadas ambas partes, las que concordarán con aquellas estipuladas en la normativa sobre contratación pública. Por ello, el CONSORCIO indica que no podría establecerse condiciones o supuestos de resolución de contrato que sean contrarias a las mencionadas en dicho documento, pues al estar contempladas en la normativa en materia de contratación estatal, constituye una prerrogativa del Estado.
- 3.21 En este orden de ideas, el demandante señala que el contenido de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato N° 005-2013-INPE/22, indica que cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, y los artículos 167° y 168° de su Reglamento; y de darse el caso, la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.22 Es decir, indica que la Entidad estaba obligada a proceder conforme al artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por cualquiera de las causales, prescritas en los numerales de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato N° 005-2013-INPE/22.
- 3.23 Ahora bien, el CONSORCIO manifiesta que para que se configure una resolución, es de obligatorio cumplimiento que la Entidad haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito en el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De esta manera, señala que aún en el caso que se haya generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no resolvía el contrato en observancia de la norma citada y el debido procedimiento, la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, perdería sus efectos recayendo en la causal de nulidad de pleno derecho según el artículo 10 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, asumiendo exclusiva responsabilidad la Oficina Regional Sur Oriente Cusco -INPE.
- 3.24 Al respecto, el CONSORCIO trae a colación lo esgrimido en la Resolución N° 1902-2009-TC-S4, donde se indicaba que la Carta Notarial mediante la cual se le comunica al Contratista la resolución del contrato, no estuvo antecedida por

la carta de requerimiento, tal como lo dispone la normativa y, por tanto, debería colegirse que la Entidad no ha dado cumplimiento al procedimiento de resolución contractual establecido.

- 3.25 Asimismo, el demandante hace referencia lo esgrimido por el Tribunal de Contrataciones del Estado – OSCE, donde sentó jurisprudencia con el último párrafo de la fundamentación 06 de la Resolución N° 1902-2009-TC-S4.
- 3.26 En efecto, alega que si la Entidad – en caso lo hubiese requerido como tal – no resolvió el contrato dentro del plazo establecido (Un día calendario según la Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22-04), entonces no se encontraba habilitada para resolverla posteriormente.
- 3.27 En este orden de ideas, el demandante señala que los argumentos esgrimidos en la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, además de no haberse seguido el debido procedimiento, contienen observaciones nuevas, independientemente que las referidas observaciones no afectan el fondo del contrato, sino que son subjetivas, accesorias y de aspecto subsanable.
- 3.28 Es así que, el CONSORCIO alega que la Entidad no cumplió con las formalidades previstas en las Normas de Contratación Estatal para la Resolución del contrato, máxime si la motivación que sustenta la referida resolución estaría referida a hechos nuevos y apreciaciones muy particulares que no se materializaban y sustentaban objetivamente en observaciones de fondo de la relación contractual, sino que se basaban en observaciones de carácter subjetivo, accesorio y de aspecto subsanable, e incluso imputables a la Entidad, colisionando de esta manera con el interés público de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE y el Principio de Trato Justo e Igualitario contemplado en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.29 En tal sentido, el demandante manifiesta que la Entidad no ha observado la formalidad que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento prevén para la resolución del contrato, por lo que la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE, es responsable de la resolución del Contrato; es decir, las obligaciones pactadas en la relación contractual materia de controversia fueron interrumpidas de manera ilegal, intencional, y negligentemente al no seguir el debido procedimiento y sin ninguna motivación.
- 3.30 El CONSORCIO alega que en el ordenamiento administrativo peruano, se ha determinado que la motivación constituye un elemento de validez de los actos administrativo, tal como se aprecia en el numeral 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y sus modificatorias. En ese sentido, agrega que dicho cuerpo legal exige que la motivación del acto administrativo deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
- 3.31 Por su parte, añade que el artículo 10° de dicho cuerpo normativo prescribe que será una causal de nulidad el defecto u omisión de los elementos de

validez del acto administrativo, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14 de la norma.

- 3.32 En ese sentido argumental, el CONSORCIO indica que se puede determinar que la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013 no siguieron el debido proceso contemplado en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, incurriéndose en una causal de nulidad del acto, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente a la Entidad.
- 3.33 Respecto a la continuidad de la ejecución de las obligaciones del Contrato N° 005-2013-INPE/22, debido a la irregular y arbitraria resolución del referido contrato, el CONSORCIO indica que la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE, como consecuencia de la resolución irregular y unilateral del Contrato N° 005-2013-INPE/22, debe continuar con la ejecución del CONTRATO, por el tiempo y el saldo que resta a la relación contractual en controversia, pues la resolución del CONTRATO se debió a causas imputables a la Entidad y no al CONSORCIO.
- 3.34 Respecto a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato N° 005-2013-INPE/22, el demandante indica que como consecuencia de la irregular y unilateral resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, se debe disponer a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE la devolución de la garantía de fiel cumplimiento constituida por la Carta Fianza N° 010392243, que asciende a un monto total de S/. 270,063.50 (Doscientos Setenta Mil Sesenta y Tres con 50/100 Nuevos Soles).
- 3.35 Respecto a que la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE asuma el pago de los gastos arbitrales del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, el CONSORCIO señala que como consecuencia de la irregular y unilateral resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, se debe disponer a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE que asuma la totalidad de los gastos arbitrales que se generen en la controversia, los mismos que ascienden a un monto de S/. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Nuevos Soles).
- 3.36 Respecto a que se ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE el pago de S/. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) por los costos administrativos que generen al CONSORCIO el presente proceso arbitral; éste último indica que habiéndose comprobado que la resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22 recae en nulidad al no haberse seguido el debido proceso contemplado en el artículo 169° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco-INPE asumir los gastos administrativos que genere la solución de controversia por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por un monto total de S/. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles), obligación que se mantiene con la Empresa GREMIFER S.A.C. (Empresa especializada al servicio de consultoría en Contrataciones Públicas), cuyo comprobante de pago sería remitido oportunamente.

RAQ

- 3.37 Como **fundamentos de derecho**, el CONSORCIO hace mención de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017; Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 3.38 Mediante Resolución N° 2, de fecha 19/02/14, se admitió a trámite la demanda presentada por el CONSORCIO, teniéndose por ofrecidos los medios probatorios.

IV. De la Contestación a la demanda presentada por el INPE:

- 4.1 Mediante escrito de fecha 07/03/2014, el INPE presentó su contestación a la demanda arbitral presentada por el CONSORCIO.
- 4.2 Con relación a la primera pretensión, el INPE manifiesta que con fecha 14 de marzo de 2013 la Oficina Regional Sur Oriente – Cusco firmó contrato con el CONSORCIO, derivado del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 018-2012-INPE/22, producto del Concurso Público N° 001-2012-INPE/22, y conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 415-2013-TC-S1 de fecha 28 de febrero de 2013, emitido por la 1° Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, que resolvió declarar fundado el recurso de apelación y otorgar la buena pro a favor del contratista.
- 4.3 Al respecto, el demandando precisa en primer lugar qué se entiende por servicio de alimentación; y señala que el mismo resulta ser un derecho concebido en la Constitución Política del Perú que le asiste a las personas que se encuentran privadas de libertad como consecuencia de los procedimientos judiciales y penales dictados por las instancias del Poder Judicial. En ese mismo sentido, señala que el Decreto Legislativo N° 654 – Código de Ejecución Penal, en su artículo 17° señala que “La Administración Penitenciaria proporcionará al interno la alimentación preparada que cumpla con las normas dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de salud”; por tanto, las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que corresponda en cantidad, calidad y condiciones higiénicas, a una nutrición adecuada y suficiente, así como las necesidades o dietas especiales, por lo que para garantizarlo se requiere la conjunción de varios elementos, tales como profesionales y/o técnicos debidamente acreditados y capacitados en la definición de menús, dosificación nutricional, provisión de insumos, preparación, supervisión y distribución de los mismos, equipamiento de cocinas, mensajería, electrodomésticos, etc.; que sumados permitan garantizar la ejecución del servicio en condiciones óptimas.
- 4.4 El INPE indica que del contrato suscrito entre las partes, se aprecia que el mismo versaba sobre el servicio de alimentación para las personas de los penales bajo la dirección de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco, y por el cual, según cláusula décima del mismo, el contratista se comprometía a suministrar las raciones alimenticias, las mismas que debían ser aptas para el consumo humano; asimismo se estableció que la Oficina Regional Sur Oriente Cusco se reservaba el derecho de efectuar la verificación de la preparación de los alimentos, así como la calidad y conservación de los insumos que son

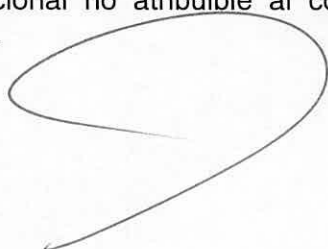
utilizados para lo cual se procedería a la utilización de personal calificado y laboratorios, según sea necesario, cuyo costo sería asumido por el contratista.

- 4.5 En cuanto a las causales que dieron origen a la resolución del contrato, el demandando manifiesta que se aprecia de la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 que, entre las obligaciones incumplidas por el contratista se encuentran: i) no haber presentado copia del expediente conteniendo el Acta de Consejo Técnico Penitenciario, copia de sentencia, informe psicológico, informe social, copia de certificados de capacitación y otros que acrediten la progresión de cada uno de los internos que labora en cocina en el EP de Cusco y ii) no haber presentado los documentos sustentatorios que acrediten la profesionalidad y experiencia requerida, según la bases, de su personal a cargo de brindar el servicio de alimentación; a pesar que dicha información fue requerida con anterioridad vía carta notarial.
- 4.6 De la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22, el INPE indica que se aprecia que la Oficina Regional Sur Oriente Cusco, dispuso resolver en totalidad el contrato firmado con el CONSORCIO por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, tal como se aprecia de la Carta Notarial N° 004-2013-INPE/22.04 de fecha 18 de abril de 2013, en la que su último párrafo señala que el cumplimiento de las obligaciones debían realizarse bajo apercibimiento de resolver el contrato; la Carta Notarial N° 005-2013-INPE/22.04 de fecha 29 de abril de 2013 y recibida por el CONSORCIO el 09 del mismo mes; Carta Notarial N° 006-2013-INPE/22 de fecha 21 de mayo de 2013; y la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22.04 de fecha 06 de junio de 2013.
- 4.7 EL INPE manifiesta que si bien del escrito de demanda el contratista señala en el punto 2.5 de la misma que, las causales contenidas en la carta Notarial N° 009-2013-INPE/22.04 difieren totalmente de las expuestas en la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22.04, dicha situación es errónea, toda vez que se aprecia de la lectura de ambas que primero, el punto 2.1 de la carta Notarial 012-2013-INPE/22 se refiere a la falta de presentación de la copia del expediente conteniendo Acta de Consejo Técnico Penitenciario, copia de sentencia, informe psicológico, informe social, copia de certificados de capacitación y otros que acrediten la progresión de cada uno de los internos que laboran en la cocina; información que también fuera solicitada en el punto 3 de la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22.04.
- 4.8 Segundo, el acápite 2.2 y 2.3 de la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22, referidos a la falta de presentación de la copia del título o diploma del chef o persona que prestaba el servicio de alimentación, también fue requerido en la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22.04, tal como se desprende del punto 4 de la misma, en la cual además de solicitar la información respecto del chef, también se solicita la presentación de documentos del nutricionista y del representante o supervisor.
- 4.9 Tercero, alega que la falta de justificación del cambio de personal a la que se hace alusión en el acápite 2.3 de la Carta Notarial N° 12.2013-INPE/22.04, había sido previamente requerida mediante Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22.04, situación que se corrobora de la lectura del punto 5 de la misma.

- 4.10 Por último, el demandando indica que en cuanto a la presentación de los informes mensuales referidos en el acápite 2.4 de la carta Notarial N° 012-2013-INPE/22.04, se tiene del punto 6 de la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22.04 que la Entidad ya había requerido al CONSORCIO para que cumpliera con la entrega de todos los informes mensuales por parte de su representante.
- 4.11 EL INPE manifiesta que si bien es cierto lo señalado por el CONSORCIO mediante Oficio N° 044-2013 CONSORCIO CEDAQUI SAC, ESDACOM, CESAR AD respecto de haber cumplido con los requerimientos realizados por la Entidad, el demandado indica que de la lectura del mismo se aprecia que este no satisfacía los requerimientos realizados por la Entidad, más aún si se tiene en cuenta que dicha carta fue presentada de manera extemporánea el 02 de julio de 2013, a pesar de que la última de las cartas notariales, por las cuales se le exhortaba a cumplir con subsanar las omisiones, fue de fecha 06 de junio de 2013, y en la cual se le otorgaba el plazo de un día calendario para cumplir con sus obligaciones.
- 4.12 Al respecto, el INPE precisa que al inicio y durante la ejecución contractual, la Entidad había solicitado el correcto cumplimiento de sus obligaciones al CONSORCIO, utilizando en primera instancia notificaciones derivadas de actas de acuerdos firmados por el representante del Contratista, presentados a efectos de coordinar directamente la prestación del Servicio en el establecimiento penal de Cusco mujeres y Cusco Varones, y el equipo de Control conformado por la Directora, Administradora y Nutricionista de la Entidad.
- 4.13 El INPE alega que si bien el contratista mediante Oficio 029-2013-CONSORCIO CEDAQUI SAC ESDACOM firmado por su administrador, el señor Cesar Alberto Garrido Devoto y dirigido al Director del EP Cusco Varones, presenta una nómina del personal; sin embargo, ninguno del personal presentado formaba parte del personal propuesto, no justificada el cambio de todo su personal, no demostró que el personal presentado hubiera sido de igual o similares características que el personal propuesto, y respecto de los internos que laboraban en la cocina, solo mencionaba "cocineros internos", sin justificar el cambio ni acreditar que los cocineros internos son de igual o similar características que el personal propuesto. Agrega que similar situación se presentó mediante Oficio 023-2013- CONSORCIO CEDAQUI SAC ESDACOM, puesto que tampoco se justificó mediante dicho documento el cambio del personal ofertado en su propuesta.
- 4.14 El demandado alega que el 11 de Abril del 2013 (a los 27 días de iniciado el Contrato), en las instalaciones del EP de Cusco Mujeres se llevó a cabo una reunión en presencia del administrador del CONSORCIO Cedaqui Sr. Américo Auccacusi Ramos y la Directora, Administradora y Nutricionista de la Entidad, en la que acordaron el cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia otorgándole un plazo razonable para su cumplimiento el mismo que vencía el 22/04/2013, hecho que quedó plasmado con la firma del acta respectiva, por la cual cada una de las partes daba conformidad a lo acordado en dicha diligencia.

RA

- 4.15 El demandado señala que el CONSORCIO, para cumplir con los documentos de presentación obligatoria para que su propuesta sea admitida al momento de postular al Concurso Público N° 001-2012-INPE/22, presentó la carta de fecha 08 de enero de 2013, adjuntando los documentos de su personal propuesto según el cuadro consignado en las páginas 5 y 6 de su escrito de contestación de demanda.
- 4.16 Conforme se aprecia del citado cuadro, el demandado señala que la documentación del personal propuesto cumplía con las exigencias de la Entidad; sin embargo mediante acciones de control realizadas por personal de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco, a partir del inicio de la ejecución del servicio, se pudo constatar que era otro el personal que se encontraba brindando el servicio de alimentación, y no el propuesto por el contratista al momento de postular al concurso público, tal como se demuestra en las acciones de control en el Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones de fechas 13/04/2013, 07/05/2013 y 26/06/2013 según lo consignado en la página 6 de su escrito de contestación de demanda.
- 4.17 El INPE menciona a su vez que en el Establecimiento Penitenciario Cusco Mujeres, ninguno de los trabajadores pertenecía a la nómina del personal de CEDAQUI, que fuera propuesto por el mismo según su carta de presentación de fecha 08 de enero de 2013 conforme lo señalado en la página 7 de su contestación de demanda referente a las acciones de control en el Establecimiento Penitenciario de Cusco Mujeres de fechas 18/04/2013, y 26/06/2013.
- 4.18 Sobre el particular, el demandado precisa que teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación no se debe pasar por alto que este tipo de contratos no califican como personalísimos, toda vez que, pese a que se tomó en cuenta el perfil del personal en la evaluación de las propuestas, dicho personal puede ser materia de variación siempre que reúna las características del originalmente presentado o en su defecto los supere; por lo cual no basta la verificación por parte de la Entidad del cumplimiento de todas las características ofertadas del personal propuesto por el contratista de tal forma que de encontrarse algún incumplimiento de sus obligaciones – claramente definidas en las Bases del proceso que dio origen al contrato, en sus propuestas y en el contrato mismo -, se resuelva total o parcialmente el contrato por causa atribuible al contratista, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del estado y del artículo 224° de su Reglamento.
- 4.19 Por ello, el INPE considera que resulta razonable que de manera excepcional se permita el cambio de personal durante la ejecución del contrato. Así, para efectos de cumplir con sus obligaciones el contratista puede cubrir el servicio contratado mediante la asignación de personal distinto al ofertado pero con las mismas o superiores características a las de aquel. Sin embargo, el demandado indica que esta precisión no implica que pueda cambiarse a todo el personal que fue evaluado inicialmente y por el cual, entre otros aspectos, se le otorgó la Buena Pro al Contratista, toda vez que debe mediar un supuesto excepcional no atribuible al contratista, es decir por caso fortuito o fuerza mayor.



- 4.20 Por otro lado, el INPE indica que si bien el contratista sostiene, en el acápite 2.7 de su escrito de demanda que bajo los lineamientos de la relación contractual, no existió un incumplimiento de las obligaciones de preparado y entrega de los alimentos a los comensales o el dejar de entregar el desayuno o almuerzo o cena, dicha situación no se encuentra de acuerdo a la realidad, toda vez que de los Informes de Ensayos LLP-0014-2013, LLP-0013-2013, LLP-0012-2013 realizado por el Laboratorio Louis Pasteur (acreditado con Registro N° LE-042), se observa que las muestras analizadas no se encuentran dentro de los límites establecidos por la norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano según RM 591-2008/MINSA.
- 4.21 En cuanto a la supuesta indebida y arbitraria resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, el demandado indica que tal como ya ha precisado, la Entidad cumplió con requerirle al CONSORCIO que cumpliera con sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato no solo mediante cartas notariales (Carta Notarial N° 004-2013-INPE/22.04), sino que además mediante Acta de Reunión de Acuerdos en el Servicio de Alimentación con el CONSORCIO CEDAQUI SAC – Cusco de fecha 11 de abril de 2013, los asistentes a dicho acto, entre ellos el señor Américo Auccacusi Ramos – Administrador del CONSORCIO, se acordó que CEDAQUI presentaría la relación nominal y documentación del personal que laboraba prestando el servicio, además de realizar el cambio completo de vajilla, entre otros, poniendo como fecha límite para el cumplimiento de dichas obligaciones el 22 de abril de 2013. Sin embargo, alega que se aprecia del Acta de Verificación de File de Personal de Trabajadores de CEDAQUI S.A.C. de fecha 23 de abril de 2013, que el CONSORCIO incumplió con subsanar las observaciones formuladas en el acta primigenia.
- 4.22 En tal sentido, el INPE manifiesta que cumplió en reiteradas oportunidades con poner a conocimiento del CONSORCIO bajo sanción de resolverle el contrato, las observaciones al contrato, con lo cual se desvirtúa lo alegado por éste; más aún, si se tiene en consideración que habiendo el CONSORCIO prestado un servicio deficiente, perjudicando no solo al INPE sino en especial a las personas (trabajadores e internos) de los penales de Cusco varones y mujeres proporcionándoles un servicio de alimentación deficiente que no respetaba los lineamientos básicos de salubridad e higiene señalados por ley, pudo acarrear que las personas enfermaran.
- 4.23 En cuanto a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, el INPE indica que el inciso 2 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula que la garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. Asimismo dicho dispositivo legal indica que el monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivo.
- 4.24 Es decir, el demandado indica que en el presente caso no procedería la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento toda vez que la misma

deberá permanecer vigente y en poder de la Entidad durante el plazo que dure el presente proceso arbitral hasta la expedición del laudo arbitral, el mismo que deberá quedar consentido y/o ejecutoriado, ello con la finalidad de cautelar el interés patrimonial de la Entidad; por lo que resulta válido retener la garantía otorgada, conforme se puede inferir del numeral 2 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- 4.25 En relación al pago de S/. 15,000.00 por concepto de gastos arbitrales, el INPE indica que teniendo en cuenta que la resolución del Contrato se debió a una causal atribuible únicamente al CONSORCIO y los documentos que avalan dicha resolución se encuentran arreglados a ley, los gastos que genere el presente proceso arbitral deberán ser a cuenta del demandante y no de la Entidad; más aún si se tiene en cuenta que según los hechos descritos, la única perjudicada ha sido la Entidad.
- 4.26 Que, respecto al pago de S/. 35,000.00 por otros gastos generados como consecuencia de la presente controversia, el demandado señala que ni de los anexos de la demanda ni de la redacción de la misma se aprecia que el demandante adjunte los comprobantes de pago sobre los cuales trata de fundamentar la pretensión en cuestión. Asimismo, indica que en aplicación supletoria del artículo 200° del Código Procesal Civil y en virtud a lo señalado por la doctrina que indica que probar es establecer la exactitud de una proposición cualquiera, es de verse que el CONSORCIO demandante no ha logrado probar con elementos de convicción suficientes los otros gastos generados supuestamente a consecuencia de la resolución del contrato.
- 4.27 Mediante Resolución N° 4, se resolvió admitir a trámite la contestación de la demanda presentada por el INPE en los términos expuestos, teniéndose por ofrecidos los medios probatorios precisados mediante escrito de fecha 10/02/14.

V. Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos

- 5.1 Con fecha 24/04/2014, se realizó la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, con la asistencia de ambas partes, de conformidad con el artículo 48° del Reglamento, siendo éstos los siguientes:

a. Respecto a la demanda (presentada el 22/01/14) y la contestación de la demanda (presentada el 07/03/14):

Primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único deje sin efecto la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de septiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, ambas diligenciadas notarialmente el 13 de septiembre de 2013, debido a la irregular y unilateral resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, al no haberse seguido el debido proceso previsto en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE la continuidad de

RAD

la ejecución de las obligaciones del Contrato N° 005-2013-INPE/22, debido a la irregular y arbitraria resolución del referido Contrato.

Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE la devolución de la garantía de fiel cumplimiento constituida por la Carta Fianza N° 010392243, que asciende a un monto total de S/. 270,063.50 (Doscientos Setenta Mil Sesenta y Tres con 50/100 Nuevos Soles), debido a la irregular y arbitraria resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, por parte de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del INPE.

Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE el pago total de los gastos arbitrales del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP por un monto ascendente a S/. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Nuevos Soles), los mismos que se habrían generado por causas imputables a la Entidad.

Quinto Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE el pago de S/. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) por los costos administrativos que genere al CONSORCIO el presente proceso arbitral.

5.2 En dicha acta, se dejó establecido que el Árbitro Único se reservaba el derecho de analizar los puntos controvertidos en el orden que considere más conveniente a los fines de resolver la controversia y no necesariamente en el orden previamente establecido. Asimismo, el Árbitro Único declaró que si al resolver uno de los puntos controvertidos llegase a la conclusión de que carece de objeto pronunciarse sobre otro u otros, podrá omitir pronunciarse sobre ellos motivando su decisión.

5.3 En la misma audiencia se admitió como medios probatorios los documentos ofrecidos por el demandante como por la demandada.

VI. Audiencia de Informe Oral y Plazo para Laudar

6.1 Con fecha 11/08/2014 se realizó la Audiencia de Informes Orales con la participación del Árbitro Único y la asistencia de ambas partes a fin de que éstas informen oralmente sus alegatos escritos.

6.2 Posteriormente, mediante Resolución N° 9 de fecha 03/09/2014 el Árbitro Único declaró que los autos se encontraban en estado para laudar, por lo que fijó el plazo para expedir el laudo en treinta (30) días hábiles, prorrogable por treinta (30) días hábiles adicionales.

CONSIDERANDOS:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Fijación de Puntos Controvertidos de fecha 24/04/14, en el presente caso la cuestión sometida a arbitraje y que debe resolverse mediante el presente laudo, está determinada en los puntos controvertidos fijados por el Árbitro Único en base a las pretensiones promovidas en el proceso y aceptadas por las partes conforme consta en la referida Acta.



Que, conviene reiterar que el Árbitro Único se reservó el derecho de analizar los puntos controvertidos en el orden que considere más conveniente. Asimismo, señaló que si al momento de referirse a alguno de los puntos controvertidos llega a determinarse que carece de objeto pronunciarse sobre otros con los que guarde vinculación, podrá omitir referirse a estos otros, expresando las razones de dicha omisión.

Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde confirmar lo siguiente:

- Que este Tribunal Arbitral Unipersonal se ha constituido de conformidad con el convenio arbitral celebrado entre las partes y las normas a las que las partes se sometieron de manera incondicional.
- Que en ningún momento se ha recusado al Árbitro Único o se ha impugnado o reclamado contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación.
- Que el CONSORCIO presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos y ejerció plenamente su derecho de defensa durante el presente arbitraje.
- Que el INPE fue debidamente notificado con la demanda, la contestó y ejercitó plenamente su derecho de defensa.
- Que, las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer las pruebas que estimaron pertinentes para sustentar sus respectivas posiciones.
- Que, las partes han tenido la facultad de presentar alegatos e, inclusive, de informar oralmente.
- Que el Árbitro Único ha laudado dentro de los plazos dispuestos en el presente arbitraje.

Asimismo, el Árbitro Único deja expresa constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en la Ley de Arbitraje y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Del mismo modo, el Árbitro Único previo al análisis de cada uno de los puntos controvertidos quiere dejar en claro los mecanismos de interpretación que serán utilizados en dicha labor.

MECANISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁRBITRO ÚNICO PARA INTERPRETAR EL CONTRATO MATERIA DEL ARBITRAJE

RAQ

¿EN QUE CONSISTE LA INTERPRETACIÓN?

La interpretación es la acción y el efecto de interpretar, de explicar o de declarar el sentido de una cosa, principalmente el de un contrato dudoso, ambiguo o contradictorio. De esta manera, el problema de la interpretación surge como una necesidad perentoria ante la oscuridad o la ambigüedad de una norma o de un acto jurídico que suscita, en quien se enfrenta a la norma o al acto, dudas en relación a su contenido.

El punto de partida en el presente arbitraje se ubica, por tanto, en el análisis de todas y cada una de las prestaciones establecidas en el Contrato.

Así mismo se analizarán los antecedentes con el objeto de encontrar el sentido de la voluntad de las partes al momento de celebrar el Contrato; voluntad que debemos encontrar en el contenido de las propias cláusulas con total prescindencia de la denominación que las partes le dieron a dichas cláusulas en el Contrato, porque este Árbitro Único considera que los contratos son lo que son jurídicamente hablando, con total independencia de la denominación que las partes pudieran haberle atribuido al mismo o a sus cláusulas.

Adicionalmente, se tendrá en consideración que:

“La interpretación debe orientarse a determinar el significado más correcto del negocio, en consideración a su función y a su eficacia como acto de autorregulación de los intereses particulares. Así las cosas, es obvio que la interpretación debe guiarse directamente al contenido del acto dispositivo que debe ser destacado en su significación completa, dentro de una valoración amplia, pero también equilibrada de los puntos de vista e intereses opuestos.”¹

PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS A SER APLICADOS POR EL ÁRBITRO ÚNICO

En la tarea interpretativa, el Árbitro Único tendrá presente los siguientes principios interpretativos:

- **De conservación del contrato**, por el cual cuando una cláusula del contrato es susceptible de interpretarse en dos sentidos deberá entenderse en aquél que puede producir algún efecto y no en el que no genere ninguno. La interpretación, como señala Díez Picazo:

¹ **SCOGNAMIGLIO**, Renato. **Teoría General del Contrato**. Traducción de **HINESTROSA**, Fernando. Universidad Externado de Colombia. Medellín. 1983. Pág. 236.

*"(...) debe dirigirse a que el contrato o cláusula discutida sea eficaz. Entre una significación que conduce a privar al contrato o a la cláusula de efectos y otra que le permite producirlos, debe optarse por esta última"*².

- **De la búsqueda de la voluntad real de las partes**, que es la posición asumida por el Código Civil Peruano cuando se presenta alguna discrepancia entre lo declarado por las partes y lo querido por ellas. En efecto, en el último párrafo del artículo 1361° del Código Civil se establece la presunción *"iuris tantum"* que "la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla". Esto quiere decir que el análisis de todos y cada uno de los documentos del Contrato deberá hacerse de manera integral y completa teniendo en cuenta la "voluntad común", a la que en la Exposición de Motivos del Código Civil se la define como:

*"(...) los fines idénticos buscados por los contratantes y que se expresan en la declaración que formulan al celebrar el contrato. No se trata, por consiguiente, del objetivo que busca cada contratante por sí mismo; y hay que presumir que lo que aparece en la relación contractual responde a esa intención, considerada de un modo integral y referida al contrato como un todo"*³.

- **De la Buena fe**, que no es otra cosa que la aplicación de las ideas de confianza y auto responsabilidad en la interpretación. Así tenemos que:

*"(...) si una de las partes, con su expresión o su declaración, suscitó en la otra una confianza en el sentido objetivamente atribuible a dicha declaración, esta parte no puede impugnar este sentido y pretender que el contrato tiene otro diverso"*⁴.

Es por esta razón, que los supuestos en que corresponde integrar —por vía del principio de la buena fe— el estatuto regulador de una determinada relación son, como expresa Ferreira Rubio:

*"(...) dos: la falta de regulación de una hipótesis dada y la necesidad de corregir una regulación contraria a la buena fe."*⁵

² DIEZ-PICAZO, Luis. **Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial**. Volumen I. Editorial Civitas. Madrid, 1993. Pág. 396.

³ Código Civil. **Exposición de Motivos y Comentarios**. Tomo VI. Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora Delia Revoredo de Debaquey. Lima. 1985. Pág. 25.

⁴ DIEZ-PICAZO, Luis. Op. Cit. Volumen I. Pág. 398.

⁵ FERREIRA RUBIO, D. Matilde. **La buena fe**. Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984. Pág. 200.

MEDIOS DE INTERPRETACIÓN QUE UTILIZARÁ EL ÁRBITRO ÚNICO PARA ENCONTRAR EL VERDADERO SENTIDO DE LO CONVENIDO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO

Será necesario utilizar de manera conjunta distintos mecanismos de interpretación. Por ello, el Árbitro Único realizará tanto una interpretación sistemática, como una interpretación integradora y una interpretación histórica del Contrato.

- Interpretación Sistemática

La interpretación sistemática es una consecuencia de la unidad lógica del contrato, de tal modo que éste debe interpretarse en función del conjunto.

Nuestro ordenamiento jurídico acoge este mecanismo de interpretación en el artículo 169° del Código Civil, en el que se establece que:

“Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”.

En la Exposición de Motivos del Código Civil se explica que:

“Se ha optado por un criterio de interpretación interdependiente o sistemático que no permite una interpretación aislada y excluye la posibilidad de que puedan alegarse pactos contradictorios, pues cada cláusula debe quedar enmarcada dentro del conjunto del acto jurídico y, por ello, para encontrar el sentido de cada cláusula es imprescindible encontrar el sentido de las demás.”⁶

- Interpretación Integradora

En la interpretación integradora no se atribuye a los contratantes una intención común mayor que la que ellos han tenido al momento de contratar, sino que se le agrega lo que por voluntad extraña (la del ordenamiento jurídico), de todas maneras debe incluirsele.

Así tenemos que a las normas contractuales propiamente dichas del Contrato, es decir, a las que de suyo le corresponden y en donde se ubican todas y cada una de las prestaciones establecidas en el Contrato, deberán sumársele las normas dispositivas

⁶ Código Civil. **Exposición de Motivos y Comentarios**. Tomo VI. Op. Cit. Págs. 297 y 298.

que supletoriamente integran el contenido contractual, así como las normas imperativas.

La interpretación integradora del Contrato preserva, por tanto, la coherencia de éste con el ordenamiento jurídico.

- Interpretación Histórica

En este caso serán valorados, principalmente, los antecedentes que permitirán explicar lo que el Contrato significa para las partes y las circunstancias posteriores a la negociación entre las que se encuentra la conducta seguida por las partes.

Se trata de realizar un estudio de todo el "iter contractual", empezando por el Proceso de Selección, atravesando por la celebración del Contrato y continuando con la ejecución de las prestaciones, a la luz del principio de la buena fe, según lo dispuesto por el artículo 1362° del Código Civil.

Como explica Díez-Picazo, es de una gran relevancia:

*"(...) la conducta o comportamiento de las partes en la preparación de las prestaciones contractuales y en la espontánea ejecución de las mismas (sobre todo cuando todavía no existían temas controvertidos) por ser un signo indubitado de la forma como en ese momento entendían el contrato que las ligaba"*⁷.

Es este comportamiento (esto es, el de las partes antes de que entre ellas surgieran discrepancias) el que será evaluado por el Árbitro Único al momento de analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos controvertidos.

Utilizando, por tanto, todos los mecanismos de interpretación anteriormente señalados, el Árbitro Único procederá a integrar lo pactado en el Contrato con las normas dispositivas e imperativas pertinentes, con el objeto de dilucidar el contenido exacto de la relación obligatoria creada por las partes.

Análisis de los Puntos Controvertidos

A continuación, el Árbitro Único procederá a analizar los puntos controvertidos que se fijaron en la audiencia del 24/04/14.

Es oportuno mencionar que debe tenerse en cuenta que el presente arbitraje es de Derecho por lo que resulta indispensable tener presente las normas legales y contractuales que rigen el Contrato, a efectos de determinar si la actuación de las partes se ajustó o no a dicho marco normativo y contractual. En base a ello, el Árbitro Único deberá determinar de acuerdo a los documentos y medios probatorios actuados a lo largo del proceso si corresponde atender lo solicitado por el Demandante.

⁷ DIEZ-PICAZO, Luis. Op. Cit. Volumen I. Pág. 401.

Sobre el primer punto controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único deje sin efecto la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de septiembre de 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio de 2013, ambas diligenciadas notarialmente el 13 de septiembre de 2013, debido a la irregular y unilateral resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, al no haberse seguido el debido proceso previsto en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. En primer lugar, a efectos de poder determinar si la resolución del contrato efectuada por el INPE fue realizada de manera correcta, es decir, conforme a ley, es imprescindible analizar, entre otras cosas lo siguiente: i) la extensión de la obligación a cargo del CONSORCIO, ii) la prestación del servicio por parte del Demandante, iii) el requerimiento efectuado por el INPE, y iv) la carta de resolución remitida por el INPE al CONSORCIO.
2. Asimismo, teniendo en cuenta que el presente arbitraje es de Derecho, resulta necesario tener a la vista las normas legales y contractuales que rigen el Contrato, a efectos de determinar si la actuación del INPE al resolverlo se ajustó o no a dicho marco normativo y contractual.
3. El artículo 1371° del Código Civil establece que *"La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración"*. Según SPOTA, citado por MANUEL DE LA PUENTE Y LAVALLE, "la resolución es un término genérico que indica la extinción de un contrato por una causa, sea legal, sea convencional".⁸ Más específicamente MIRABELLI dice que "la resolución es un remedio concedido a una de las partes de un contrato en algunas hipótesis en las cuales la actuación de éste no corresponde al contenido del mismo, a través del cual puede lograrse la disolución del vínculo contractual".⁹
4. Ya en el ámbito de las normas que rigen la contratación con entidades públicas, el artículo 40°, inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado establece :

"Artículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos

Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas

(...)

c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica."

⁸ De la Puente y Lavalle, Manuel. "El Contrato en General". Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol XI, Tomo II, PUCP Fondo Editorial 1996, pág. 173.

⁹ Ibid., pág. 174.

Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece:

“ Artículo 167.- Resolución de Contrato

Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley.”

“Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento

La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista:

- 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello”.*

5. El artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que:

“Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. (...) Si vencido dicho plazo el incumplimiento, continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma parcial o total comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.(...)”

6. En cuanto a los alcances del servicio, queda claro en el expediente que el servicio contratado tenía por finalidad la prestación del servicio de alimentación para personas y que era responsabilidad del CONSORCIO cumplir con todas las condiciones de higiene y salubridad requeridas, así como con todas las exigencias y requisitos previstos en el Contrato y en las bases del concurso público, en especial de aquellas que le permitieron adjudicarse la buena pro. Es así que en los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos se indicaba que el Contratista, entre otras cosas, debía contar con la asesoría técnica de un profesional nutricionista habilitado con experiencia laboral en entidades públicas y privadas; que el nutricionista podría ser reemplazado por razones debidamente justificadas por otro profesional nutricionista de igual o similar experiencia; que deberá contar con un cocinero profesional o chef con experiencia, el cual podría ser reemplazado por razones debidamente justificadas por otro de igual experiencia; que podría opcionalmente contar con personal interno evaluado y autorizado por el Consejo Técnico Penitenciario; que debía tener un expediente por cada personal a su cargo poniendo especial énfasis en la documentación requerida en el caso de internos cocineros.
7. En cuanto a la prestación del servicio, se advierte de autos que existe diversa documentación (cartas, actas, referencias en los escritos de demanda y contestación y otros presentados por las partes) que demuestra que se

presentaron problemas con el cumplimiento por parte del CONSORCIO de diversas obligaciones derivadas del Contrato y de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos. Si bien es cierto que no afectaron el servicio en sí mismo pues se siguió atendiendo a las personas beneficiadas, ello no implica que su falta de cumplimiento no tenga ningún tipo de consecuencia jurídica. Todo lo contrario, constituyeron incumplimientos atribuibles a una de las partes. De manera puntual, resulta muy relevante para los efectos del presente análisis, lo señalado en las Cartas Notariales N° 004, 005, 006 y 009-2013-INPE/22.

8. De lo analizado hasta el momento, el Árbitro Único considera que los términos de la contratación del servicio aluden claramente a la prestación del servicio de alimentación, el mismo que a su vez –para garantizar su calidad- requiere del cumplimiento por parte del CONSORCIO de una serie de exigencias de carácter administrativo, documentario, de salubridad, y de otra índole. En otras palabras, resulta evidente que este fue el motivo de la contratación y que las exigencias de tipo administrativas y de otra índole contenidas en los Términos de Referencia fueron absolutamente relevantes y permitieron al CONSORCIO ganar la Bueno Pro del Contrato y su cumplimiento durante la vida del Contrato resulta imperativo.

Es importante mencionar que de acuerdo con la cláusula Sexta del Contrato claramente se indica que el Contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes, como es el caso puntual de los Términos de Referencia y Requisitos Técnicos Mínimos mencionados en el numeral precedente.

Por lo expuesto, el Árbitro Único no comparte la posición esgrimida por el CONSORCIO en el sentido que la inobservancia de dichas exigencias no podía ser considerada como un incumplimiento contractual que pudiera dar lugar a la resolución del Contrato.

9. De igual modo, es necesario analizar el requerimiento efectuado el INPE mediante Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22 de fecha 6 de junio del 2013. En dicha comunicación queda claro que el INPE requirió al CONSORCIO cumplir con diversas obligaciones a su cargo, bajo apercibimiento de resolver el Contrato, otorgándole para ello un plazo de un (1) día calendario.

El CONSORCIO presentó sus descargos, los mismos que a entender del INPE no subsanaron a cabalidad todos los requerimientos realizados, siendo además extemporáneo.

10. Cabe mencionar que existieron comunicaciones previas del INPE al CONSORCIO (Cartas Notariales N° 004, 005 y 006-2013-INPE/22) en donde también se le requería formalmente al CONSORCIO el cumplimiento o realización de determinadas conductas.
11. Está demostrado en autos que el INPE otorgó al CONSORCIO, en más de una ocasión, la oportunidad para que subsane las observaciones y/o requerimientos formulados, sin que el CONSORCIO lo haya hecho de manera completa y adecuada. Cumplida esta condición, por tanto, el Árbitro Único concluye que la



resolución del Contrato tiene suficiente respaldo contractual y legal y no puede ser calificada de irregular, unilateral o arbitraria.

12. Finalmente, se aprecia que la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 de fecha 12 de setiembre del 2013 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 de fecha 15 de julio del 2013, ambas diligenciadas notarialmente el 13 de setiembre del 2013, por la cual el INPE declara resuelto el contrato por un supuesto incumplimiento y falta de subsanación adecuada de los requerimientos realizados mediante la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22 antes comentada.

Si bien el CONSORCIO alega que las causales contenidas en la Carta Notarial N° 009-2013-INPE/22 difieren radicalmente de los motivos expuestos en la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22, el Árbitro Único luego de analizar los autos ha verificado que las causales que dieron origen a la resolución del Contrato son las siguientes:

- i) no haber presentado copia del expediente conteniendo el Acta de Consejo Técnico Penitenciario, copia de sentencia, informe psicológico, informe social, copia de certificados de capacitación y otros que acrediten la progresión de cada uno de los internos que labora en cocina en el EP de Cusco Varones (documentación requerida en el punto 3 de la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22);
 - ii) no haber presentado copia del Título o diploma del cocinero o chef que viene prestando el servicio de alimentación (documentación requerida, junto con otra, en el punto 4 de la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22);
 - iii) no haber justificado el motivo del cambio ni haber acreditado documentalmente que el nuevo personal es de igual o similares características al personal propuesto, ni haber acreditado la experiencia necesaria ni los requerimientos técnicos mínimos de diversas personas que venían prestando el servicio (documentación requerida en el punto 5 de la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22); y
 - iv) haber presentado copia de los Informes Mensuales correspondientes en los EP Cusco Varones y Mujeres solamente por los meses de mayo y junio, faltando los meses de marzo y abril (documentación requerida en el punto 6 de la Carta Notarial N° 09-2013-INPE/22).
13. En opinión del Árbitro Único no existe una falta de correspondencia entre las causales invocadas (cuyo cumplimiento fue requerido bajo apercibimiento de resolver el Contrato) y aquellas que finalmente motivaron dicha resolución. Es cierto que algunas de las causales iniciales ya no son mencionadas en la carta de resolución ni en la Resolución Directoral pero ello en nada afecta su validez y eficacia, más aun si del expediente se puede concluir que las restantes no fueron oportunamente subsanadas.
14. De lo anterior, el Árbitro Único llega a la conclusión que el Contrato fue correctamente resuelto habiendo el INPE seguido el procedimiento legalmente establecido por lo que no corresponde dejar sin efecto la Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 ni la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22.

RAD

15. Por todo lo anterior, el Árbitro Único considera que la primera pretensión de la demanda debe ser declarada infundada.

Sobre el segundo punto controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE la continuidad de la ejecución de las obligaciones del Contrato N° 005-2013-INPE/22, debido a la irregular y arbitraria resolución del referido Contrato.

1. Atendiendo a lo analizado con relación al primer punto controvertido y estando a que el Árbitro Único considera que la resolución del Contrato efectuada por el INPE si cumplió todos los pasos previstos en la ley, y por tanto resulta ser válida y eficaz, no corresponde disponer la continuidad de la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del CONSORCIO.
2. Por lo antes expuesto, el Árbitro Único considera que la segunda pretensión de la demanda debe ser declarada infundada.

Sobre el tercer punto controvertido: Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE la devolución de la garantía de fiel cumplimiento constituida por la Carta Fianza N° 010392243, que asciende a un monto total de S/. 270,063.50 (Doscientos Setenta Mil Sesenta y Tres con 50/100 Nuevos Soles), debido a la irregular y arbitraria resolución del Contrato N° 005-2013-INPE/22, por parte de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del INPE.

1. De acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará a simple requerimiento de la Entidad, *“cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado”*.
2. Sobre este aspecto, el Árbitro Único comparte la posición esgrimida por el INPE en el sentido que no procedería la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento toda vez que la misma deberá permanecer vigente y en poder de la Entidad durante el plazo que dure el presente proceso arbitral hasta la expedición del laudo arbitral, el mismo que deberá quedar consentido y/o ejecutoriado, ello con la finalidad de cautelar el interés patrimonial de la Entidad.
3. Por lo antes expuesto, el Árbitro Único considera que la tercera pretensión de la demanda debe ser declarada infundada.

Sobre el cuarto y quinto punto controvertido:

RSP

- Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE el pago total de los gastos arbitrales del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP por un monto ascendente a S/. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Nuevos Soles), los mismos que se habrían generado por causas imputables a la Entidad.
 - Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco – INPE el pago de S/. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) por los costos administrativos que genere al CONSORCIO el presente proceso arbitral.
1. Que, en lo que respecta a las costas y costos del proceso arbitral, el inciso 2 del artículo 56° del Decreto Legislativo N° 1071 (Ley de Arbitraje), dispone que el Tribunal Arbitral, o en su caso el Árbitro Único, se pronunciará en el Laudo sobre la distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73° del referido cuerpo legal.
 2. Que, de igual manera, el artículo 70° del mencionado Decreto Legislativo precisa lo siguiente:

“Artículo 70°.- Costos

El Tribunal Arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:

- a) *Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.*
- b) *Los honorarios y gastos del secretario.*
- c) *Los gastos administrativos de la institución arbitral.*
- d) *Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.*
- e) *Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.*
- f) *Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.”*

Que, por su parte, el inciso 1 del artículo 73° del mismo cuerpo de leyes, señala lo siguiente:

“Artículo 73°.- Asunción o distribución de costos

El Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso”.

3. Que, aplicando las normas mencionadas al caso materia de análisis, y atendiendo a que no existe pacto de las partes sobre las costas y costos, debe señalarse que el Árbitro Único ha apreciado que la resolución del contrato fue correcta y que la

actuación del INPE se encontró ajustada a derecho, corresponde condenar al CONSORCIO al pago de las costas y costos del presente proceso arbitral, por lo que el Árbitro Único considera que la cuarta y quinta pretensión de la demanda deben ser declaradas infundadas.

V. Parte Resolutiva

Que, el Árbitro Único deja constancia que para la expedición de este laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba, y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo, habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral y en la expedición de este laudo, los principios del derecho a un debido proceso que orientan y ordenan todo arbitraje.

Que, por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Arbitraje, Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, el Árbitro Único, en Derecho,

LAUDA:

PRIMERO: Declarar **INFUNDADA** la Primera Pretensión formulada por el Demandante, y en consecuencia, se declara que la resolución del Contrato declarada por el INPE mediante Carta Notarial N° 012-2013-INPE/22 y la Resolución Directoral N° 136-2013-INPE/22 fue realizada conforme a ley.

SEGUNDO: Declarar **INFUNDADA** la Segunda Pretensión formulada por el Demandante, por lo que no corresponde ordenar la continuidad de la ejecución de las obligaciones del Contrato N° 005-2013-INPE/22.

TERCERO: Declarar **INFUNDADA** la Tercera Pretensión formulada por el Demandante, por lo que no corresponde ordenar al INPE devolver la garantía de fiel cumplimiento constituida por la carta fianza N° 010392243 por S/. 270,063.50.

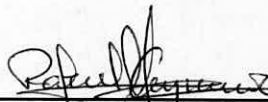
CUARTO: Declarar **INFUNDADAS** la Cuarta y Quinta Pretensión formuladas por el Demandante, y en consecuencia se declara que corresponde condenar al Demandante al pago exclusivo de las costas y costos del presente proceso arbitral.

QUINTO: Establecer los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral en los montos previamente cancelados.

RAL

SEXTO: Remitir al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, copia del presente laudo arbitral.

Notificar a las partes.



Rafael Aysanoa Pasco
Árbitro Único



Silvia Rodríguez Vásquez
Secretaria General de Conciliación y Arbitraje
Centro de Arbitraje PUCP